

Guerra y sociedad en Centroamérica: preguntas necesarias, respuestas pendientes (Sugerencias a raíz de un proceso de investigación)

Mario Zúñiga Núñez¹

Introducción

En junio de 2013 el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales me otorgó una beca para profundizar sobre el estudio de la generación de preguerra en El Salvador y la concepción de juventud que subyacía en ella. El trabajo se complementa con otras iniciativas que he venido desarrollando en El Salvador y Costa Rica acerca de cómo pensar a las personas jóvenes desde un marco histórico que permita ir más allá de los esencialismos que cruzan constantemente el tema. La experiencia al realizar el trabajo confirmó una serie de ideas que han surgido con respecto a los conflictos armados que vivió la región.

Pensar la historia inmediata de Centroamérica implica enfrentarse a la comprensión del hecho mayúsculo de la crisis que se vivió cuando confluyeron las guerras civiles de El Salvador y Guatemala, con la guerra de baja intensidad que desarrolló Estados Unidos contra Nicaragua, todo ello en el periodo 1980-1996. Los conflictos armados en nuestra región tienen multiplicidad de aristas y plantean diversidad de temas urgentes para el trabajo de las ciencias sociales. En contraste con esta enorme cantidad de temáticas, en la actualidad pocos estudiosos se dedican a la comprensión de estos fenómenos, menos aún desde una perspectiva regional. Entre los trabajos que destacan en este esfuerzo están los de Torres Rivas (1993a, 1993b; 2011); Krujit (2007), Bataillon (2003), Burgos (2007), Sanford (2006), Bourgois (2005) y Brett (2007); al lado de los importantes aportes de la Comisión de la Verdad de El Salvador (1993), el informe de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (1998) y la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (2006) de Guatemala. Contraria fue la tendencia en los años previos o durante los conflictos cuando si hubo una copiosa producción regional sobre las problemáticas que nos aquejaban, un registro muy interesante de este pensamiento centroamericano se encuentra en las incontables publicaciones de la Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA) o los esfuerzos regionales de FLACSO (como la publicación de los 6 tomos de la Historia de Centroamérica). Sin embargo, con la llegada de los Acuerdos de Paz y el neoliberalismo, el pensamiento crítico se redujo a su mínima expresión, hasta llegar a pender de hilos muy delgados que se vinculan a caprichosas normas de cooperación internacional.

A continuación presentaré un pequeño diagnóstico sobre las principales problemáticas que ha traído el conflicto armado a la generación de conocimiento regional y endémico, y posteriormente, puntualizaré algunas sugerencias que permitan salir adelante con las problemáticas señaladas. La idea es que estas reflexiones sean de alguna utilidad para

¹ Antropólogo social costarricense. Realizó sus estudios de grado en antropología en la Universidad de Costa Rica (UCR), la Maestría en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la UCR. Labora como profesor en la Escuela de Antropología de la UCR. Publicó en 2006 “Cartografía de otros mundos posibles: el rock y reggae costarricense según sus metáforas” (Premio de ensayo UNA palabra de la Universidad Nacional) y en 2010 “Pensar a las personas jóvenes: más allá de modelos o monstruos” (Editorial DEI). En el año 2012 presentó su tesis doctoral: “Enfrentamientos que retornan: institucionalización de pandillas en la sociedad salvadoreña”. Es columnista en la revista Paquidermo y del diario salvadoreño ContraPunto. Correo electrónico: zn.mario@gmail.com

instituciones y tomadores de decisión que puedan intervenir en el reto de generar respuestas sobre nuestro pasado reciente, que posean un alto rigor científico y, al mismo tiempo, que se puedan difundir de manera más popular (por medio de los Ministerios de Educación por ejemplo). Una precisión antes de comenzar: si bien intento hacer una reflexión de carácter centroamericano, los datos con los que cuento actualmente vuelcan su balanza hacia El Salvador, que es el país en que más he concentrado mis investigaciones. Confío en que refiriéndome a sus datos primordialmente y con perspectiva centroamericana, tocaré fibras regionales (como la aplicación de Programas de Ajuste Estructural, el desfinanciamiento de la Educación Pública o la ausencia de protagonismo del sistema universitario público).

Preguntas en torno a la relación guerra-sociedad en Centroamérica

Durante la década de los años 80 del siglo XX Centroamérica pasó por una muy difícil circunstancia política y humana. En la región se vivieron simultáneamente enfrentamientos armados en tres países. En El Salvador el conflicto confrontó al aparato represivo (legal e ilegal) asesorado por los Estados Unidos, con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) - para ese momento era un frente de guerrillas-; en Nicaragua se comenzó a desarrollar un enfrentamiento en las fronteras con Costa Rica y Honduras entre el recién constituido gobierno de izquierda del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) y “la contra”, una organización de tropas irregulares asesorada por el Departamento de Inteligencia de Estados Unidos; por último, en Guatemala se revitalizó un conflicto que venía desde 1960 cuando se conformó otro frente de organizaciones guerrilleras, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que enfrentó al Ejército Nacional (también apoyado por Estados Unidos) en los territorios mayas de el norte del país.

En los conflictos de Guatemala y El Salvador había un reclamo histórico de comunidades campesinas por acceso a la tierra, mezclado con una oposición política (socialdemócrata y marxista) que había quedado totalmente excluida del proceso de participación ciudadana y que tenía años de ser objeto de persecución, tortura y asesinato selectivo (una situación muy parecida se había vivido en Nicaragua hasta 1979 cuando el FSLN tomó el poder por las armas).

Los efectos de los enfrentamientos fueron desastrosos en términos humanos, según los estudios sobre el periodo, a la mitad de la década de los 80 había un poco más 450 mil refugiados si sumamos a los salvadoreños, los guatemaltecos y los nicaragüenses. El desplazamiento interno por los conflictos implicó la movilización de dos millones de personas, familias campesinas pobres en su mayoría, que por miedo al enfrentamiento se fueron de sus tierras y lo perdieron todo (dormían en muchos casos al descampado y se alimentaban de raíces). El desempleo hacia mitad de la década ascendía a 25,3% en El Salvador, 23,8% en Nicaragua y 22% en Honduras y la pobreza alcanzaba a un 70% de la población de la región –en ese momento 18 millones de personas- y la cifra aumentaba si se consideran únicamente las poblaciones rurales (Torres-Rivas, 1993b: 163-182)².

² En referencia al desastre humano que significó este periodo se puede consultar también el Informe de la Comisión de la Verdad de El Salvador (1993), informe de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (1998), el testimonio de Rigoberto Menchú (Burgos, 2007) los documentos etnográficos de Victoria Sanford (2006) y Phillp Bourgois (2005), la reflexión sociológica de Sergio Tischler (2006) y Rudf Brett (2007). Para un panorama de la dinámica política ver Torres-Rivas (1993a; 1993b).

A medida que fueron avanzado los años 90 y se dieron una serie de factores (como la caída de regímenes del llamado “socialismo real”, el reflujo de la izquierda a nivel mundial, la reducción de apoyo a las opciones armadas y el avance del “Consenso de Washington”), las fuerzas centroamericanas en conflicto buscaron la vía de la negociación y el pacto. Un proceso regional llamado “Esquipulas II” sirvió como marco institucional para sentar en la mesa a las partes en conflicto y promover Acuerdos de Paz que se firmarían en 1992 en El Salvador y 1996 en Guatemala. Las fuerzas de “la contra” fueron desmovilizadas en cuanto la coalición Unión Opositora (UNO) derrotara al FSLN en las elecciones de 1990 en Nicaragua.

Un proceso social de esta magnitud sin duda merece toda la atención que las ciencias sociales puedan brindarle para poder generar una reflexión necesaria, en la que los actores sociales y políticos se vean reflejados y puedan actuar en consecuencia. Son muchas las preguntas y muchos los frentes hacia donde se puede orientar las reflexiones en aras de generar un discurso verosímil y sencillo de divulgar acerca de nuestro pasado inmediato:

- ¿Porqué se gestaron a los conflictos armados?
- ¿Qué papel jugaron los diferentes sectores sociales en los conflictos?
- ¿Qué relación tuvieron los conflictos con la dinámica internacional y la geopolítica mundial?
- ¿Cuáles son las consecuencias subjetivas de los conflictos?
- ¿Cómo atravesaron los conflictos las vidas de tantas personas?
- ¿Qué fue de la generación de centroamericanos que se fue a la guerra?

Estas y muchas otras preguntas, aunque han sido abordadas por importantes estudiosos/as, están todavía lejos de haberse consolidado como un campo de estudios en la región, y mucho menos, han sido retomadas por el aparato público de nuestros países en forma de programas de investigación institucionales, líneas de trabajo en los Ministerios de Educación o iniciativas de las redes de museos. Algunos esfuerzos honrosos pero escasos los realizan organizaciones de la sociedad civil que se encargan de la labor de rescate de la memoria como H.I.J.O.S. en Guatemala o el Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI) en El Salvador.

Respuestas pendientes: ¿Porqué se nos dificulta pensar a profundidad los conflictos armados?

Son varios los factores que no han permitido que se realice una explicación conjunta y sopesada de los procesos sociales que gestaron la crisis y el enfrentamiento armado en Centroamérica. Aquí se señalarán cuatro que se encuentran imbricados y resaltan por su carácter relevante:

1. De la guerra al neoliberalismo

Una razón muy importante es la dinámica política que siguió a la conclusión de los conflictos armados. Los acuerdos de Paz y el cese al fuego se concretaron entre 1990 (Nicaragua) y 1996 (Guatemala). Si uno se fija en los calendarios electorales de la región se dará cuenta que estas fechas coinciden con el asenso al poder de partidos políticos interesados en la liberalización y aplicación del Consenso de Washington: en Nicaragua, sectores políticos ligados primero con la Unión Nacional Opositora y luego con el Partido Liberal Independiente gobernaron durante 4 administraciones seguidas;

en Guatemala los presidentes Jorge Serrano Elías, Ramiro de León Carpio y Álvaro Arzú imprimieron una tónica marcada por la negociación con la guerrilla al tiempo que se impulsaba la agenda de Ajuste Estructural; y en El Salvador, el derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) gobernó con hegemonía en el legislativo entre 1989 y 2009. Esta tendencia política muestra una fuerte presencia de la agenda de derecha sobre el tema clave de la reducción del aparato del estado. De allí se puede extraer la idea de que la institucionalidad que había sido ya quebrantada con el rigor del propio conflicto armado le siguieron una serie de políticas que, lejos de fortalecerla, la debilitaron aún más (como la privatización de los servicios públicos, el achicamiento del aparato del estado, la inhibición de la política hacendaria redistributiva, la transferencia de recursos públicos a empresas privadas, etc).

El resultado de este proceso es el esperable: una sociedad que vive por décadas un conflicto armado y que sale de él para entrar en un periodo de economía de ajuste estructural, resulta doblemente penalizada. Primero por la desestructuración propia de la dinámica de guerra cuyos efectos han sido evidenciados en diversos estudios (Martín-Baró, 2000; 2004; 2007) y posteriormente por la desvinculación que introduce, en una colectivo ya pauperizado por la guerra, la reducción del aparato estatal y la lucha por los recursos a través del mercado, este tipo de efectos también han sido demostrados por la ciencia social (Waquant, 2000). No es de extrañar que un proceso como este resulte en la incapacidad de combatir los problemas más angustiantes, por ejemplo, Honduras, Guatemala y Nicaragua comparten, aún hoy, luego de 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz, la nada honrosa cifra de que a más del 50% de su población vive por debajo de la línea de la pobreza (CEPAL, 2014)³.

2. *Las élites conservan su poder económico y militar*

Las sociedades centroamericanas salieron de la conflictividad bélica para ingresar a una conflictividad económica, profundizando sus niveles de desigualdad y pobreza. Este traspaso muestra, que si bien habían cambiando los términos bélicos en los que se planteaba la política durante la crisis, las élites económicas y políticas apenas y se movieron de sus lugares. El ejemplo claro está en los Acuerdos de Paz de El Salvador y Guatemala. Los estudiosos coinciden (Krujit, 2009; Torres Rivas, 2011) en que el Acuerdo de Paz salvadoreño de 1992 provino del convencimiento de los dos bandos de que había un empate entre el FMLN y las Fuerzas Armadas que se expresó con claridad en la ofensiva de 1989 donde el FMLN, pese a haber tomado importantes zonas de San Salvador, no tuvo la capacidad de hacerse con el poder. Desde este convencimiento las partes plantearon una serie de acuerdos basados en puntos mínimos pero fundamentales (entre ellos, los más importantes: la reducción y reorganización de las FF.AA. y el reconocimiento del FMLN como partido político para participar en la democracia liberal). Por su parte la URNG de Guatemala, aunque con una organización bastante más disminuida que el FMLN, pudo negociar unos ambiciosos acuerdos que incluían el reconocimiento de gran cantidad de derechos sociales y culturales para sectores históricamente excluidos de la dinámica social, además de convertir a la fuerza guerrillera en partido político.

³ El hecho de que hoy en día se haya realizado un cambio de signo político en Nicaragua y El Salvador no quiere decir que necesariamente que estas tendencias se hayan revertido, en algunos casos han continuado, la variedad de factores a los que se puede atribuir esto no dependen necesariamente del partido en el gobierno. Este sería una discusión muy pertinente, sin embargo se sale del rango de este planteamiento.

Los resultados en los dos casos abonan en el análisis que aquí se hace. El FMLN consiguió establecerse como segunda fuerza política en El Salvador a partir de 1994 pero no pudo tener mayoría legislativa hasta 2007 y ganó una elección hasta 2009. Por su parte, la URNG se vio reducida a una mínima expresión electoral desde su primera elección y ha sobrevivido a duras penas hasta la actualidad. Cuando se llevó la agenda de derechos sociales y culturales para legitimarla vía referéndum en Guatemala en 1999 fueron derrotadas todas las iniciativas de reivindicación de los sectores sociales.

Por el contrario, las élites de poder que controlaban el Estado antes y durante la crisis pudieron mantener este dominio. Esto con sus matices, por ejemplo, la élite militar salvadoreña fue acuartelada como resultado de los Acuerdos de Chapultepec, mientras que los militares guatemaltecos gozan hasta hoy de un gran poder en todas las esferas de la vida pública (como muestra el reciente revés a la sentencia contra el Gral Efraín Ríos Montt o la elección de Gral Otto Perez Molina). Asimismo, las familias que históricamente han ostentado puestos de élite en la economía regional como Pela, Paiz o Simman, siguen siendo dueños de importantes capitales y continúan sus patrones de explotación de manera estable.

Es así como, las élites económicas y militares que continuaron ejerciendo el poder luego de los Acuerdos de Paz han posicionado sus propias interpretaciones sobre los conflictos armados, por encima de otros sectores sociales que tienen una cuota mucho más marginal en la vida pública. En muchos casos esto ha significado el silencio oficial sobre crímenes de lesa humanidad (caso del genocidio Ixil en Guatemala o la masacre de El Mozote, este último, que fue recordado por el Poder Ejecutivo salvadoreño recién en 2009 cuando el FMLN asumió el poder).

3. El desmantelamiento de las universidades públicas

Es complejo en un espacio como el que se tiene en este documento, dar cuenta de un proceso como el desmantelamiento que sufrieron las Universidades Públicas desde antes de que comenzaran los conflictos armados centroamericanos. En todo caso me referiré aquí a tendencias prevalecientes en El Salvador y Guatemala, dado que el caso nicaragüense debe analizarse desde otra óptica, considerando el carácter revolucionario del gobierno del FSLN durante la década de 1980.

El proceso de desmantelamiento de las Universidades Públicas es anterior a la llegada del neoliberalismo y tiene que ver con el lugar político que ocuparon estos centros de enseñanza en la región. Habría que remontarse a la década de 1960 y al Mercado Común Centroamericano (MCC) para recordar que en este momento histórico fue cuando el sistema universitario de la región experimentó dos impulsos: 1) de carácter económico, que venía del propio MCC y del programa Alianza para el Progreso que gestionaba Estados Unidos como política contención hacia el “comunismo internacional”, y 2) de carácter curricular, que aprovechó las innovaciones pedagógicas y educativas de la época para cambiar el rostro de las universidades y hacerlas espacios de formación masiva, abierta e integral, incorporando, por ejemplo, Facultades de Estudios Generales.

A lo largo de esta década las Universidades Públicas se robustecieron institucionalmente, al tiempo que se nutrían de un currículum humanista que se alejaba

de la educación de carácter técnico y elitista (Almeida, 2011). En este contexto institucional en el seno de las Universidades Públicas, florecieron una serie de obras de carácter centroamericanista, fundamentales para el estudio de la región como “La patria del criollo” de Severo Martínez, “La interpretación del desarrollo social centroamericano” de Edelberto Torres-Rivas o “Formación y lucha del proletariado industrial salvadoreño” de Rafael Menjivar. También se generó una institucionalidad cultural que acuerpaba este esfuerzo universitario con el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA).

Con el crecimiento institucional, las universidades públicas reforzaron su lugar a lo interno de las sociedades: espacios de creación de pensamiento crítico, con autonomía de gestión y libertad de cátedra. Era de esperar entonces, que estas características las confrontaran de manera cada vez más decidida con los regímenes militares que comenzaron a sucederse en la región desde mediados de siglo XX. Las universidades se fueron convirtiendo progresivamente en espacios de contestación, protesta y crítica de las limitaciones a las libertades públicas que se vivían en los países (Ver Almeida 2011; Torres-Rivas, 2011). Esta criticidad se reprimió de múltiples maneras que iban desde la toma de los campus por parte de las Fuerzas Armadas, pasando por la imposición de autoridades universitarias pro militares, la persecución, desaparición, exilio y torturas de profesores, estudiantes y autoridades universitarias. A medida que los conflictos se fueron agudizando, estas tendencias se profundizaron en evidente detrimento de la calidad de la docencia y la investigación. Se señalan a continuación cuatro consecuencias puntuales que coadyuvaron al retroceso del sistema universitario público:

a. Golpe al aparataje institucional y financiamiento de las universidades

El proceso de intervención institucional, inhibió la capacidad administrativa de las propias universidades y redujo sus posibilidades de acción. Las convirtió en espacios carentes de recursos, sin becas para formar nuevos cuadros, bibliotecas con colecciones desactualizadas, sin recursos técnicos para la enseñanza, etc. Por las posiciones políticas que asumieron sus miembros, las instituciones fueron penalizadas en términos políticos (se les excluyó como interlocutoras legítimas del proyectos de Estado), culturales (se les limitó su libertad de expresión y de cátedra) y económico (se les recortó sus recursos).

b. Persecución de docentes, funcionarios y estudiantes

Eventualmente, dada la incorporación masiva de estudiantes universitarios a procesos revolucionarios, las universidades serían señaladas como espacios que albergaban “subversivos” (una categoría que, bajo los regímenes militares podía abarcar, desde personas efectivamente organizadas en contra del Estado hasta quienes expresaran pequeños disensos o críticas con el orden de las cosas). Esto ocasionó la persecución y vigilancia constante de estudiantes y profesores quienes eran amenazados de ser capturados o corrían el riesgo de ser torturados o ajusticiados, o bien, enviados al exilio.

c. *Las ciencias sociales y humanidades como afectadas en los enfrentamientos.*

Si bien es cierto, estudiantes y profesores de todas las carreras se vinculaban a los movimientos revolucionarios, fueron las disciplinas afines a las ciencias sociales y las humanidades de las más castigadas por la política represiva. Es probable que la enseñanza de las ciencias sociales, la filosofía y el derecho abriera expectativas de cambio social para los y las estudiantes por los cuales era factible luchar en el escenario nacional. Esto probablemente determinó que gran cantidad de estudiantes se incorporaran a los procesos revolucionarios convirtiéndose en dirigentes políticos y sociales, con las consecuentes represalias que significó para las instituciones (por cierto, sobre este tema puntual, todavía no se realizado un estudio que aproveche el testimonio de quienes sobrevivieron a al proceso de los conflictos armados).

d. *La dificultosa vida académica*

No hay duda de que el rigor de la vida militante dificultó a toda una generación un adecuado desempeño académico. Aplicando al pie de la letra la onceava tesis sobre Feuerbach de Marx (“Los filósofos no han hecho más que *interpretar* de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de *transformarlo*”), las generaciones de jóvenes estudiantes de las décadas de 1960, 1970 y 1980 acudieron a atender las urgencias sociales y políticas de su tiempo internándose de lleno a la militancia y dejando de lado el estudio. A esto hay que agregar, que el clima de persecución política y amedrentamiento tanto para estudiantes como para profesores, y el desfinanciamiento de la universidad, generaban un entorno en el que el rigor del estudio era casi imposible.

Estas tendencias se mantuvieron durante la época de los conflictos armados. Hoy a dos décadas de los Acuerdos de Paz, las Universidades Públicas apenas están logrando restablecer el lugar social que tenían antes de la guerra, cuando sus intelectuales y estudiantes tenían una importante presencia en la gestión y decisiones públicas de sus países. Un efecto colateral de este proceso que conviene anotar, es que en la actualidad, los estudios que se producen sobre los fenómenos que aquí nos ocupan, son en su mayoría de carácter nacional, sin criterios comparativos con en ámbito centroamericano y mucho menos de carácter regional. Las Universidades Públicas no solo perdieron terreno político, cultural y financiero, también con esto vino aparejada una vuelta a la mirada nacionalista que eliminó la capacidad de reflexión de rango regional.

Ha sido hasta inicios de este siglo XXI que estas instituciones han vivido un lento proceso de recuperación y que las disciplinas de las ciencias sociales han comenzado a tener un realce más importante. Un buen ejemplo de este proceso histórico es el caso de la disciplina de Historia, cuyo currículo tuvo una renovación y auge en la Universidad de El Salvador durante la década de 1960, que sería arrasado por las dificultades políticas acá señaladas y que volvería a resurgir mucho tiempo después hasta el año 2000 (Ver Prud `Homme, 2011).

4. *El Salvador: financiamiento de educación*

El cuarto y último aspecto que señalaré tiene que ver con el financiamiento de la educación pública. Este no es un aspecto que incida de manera puntal sobre las preguntas sobre los conflictos pero no se puede negar que determina la condición de posibilidad que tiene una sociedad para pensarse a sí misma. A continuación se hará un repaso del caso salvadoreño, que es el que he tenido más cerca a raíz de mis procesos de investigación.

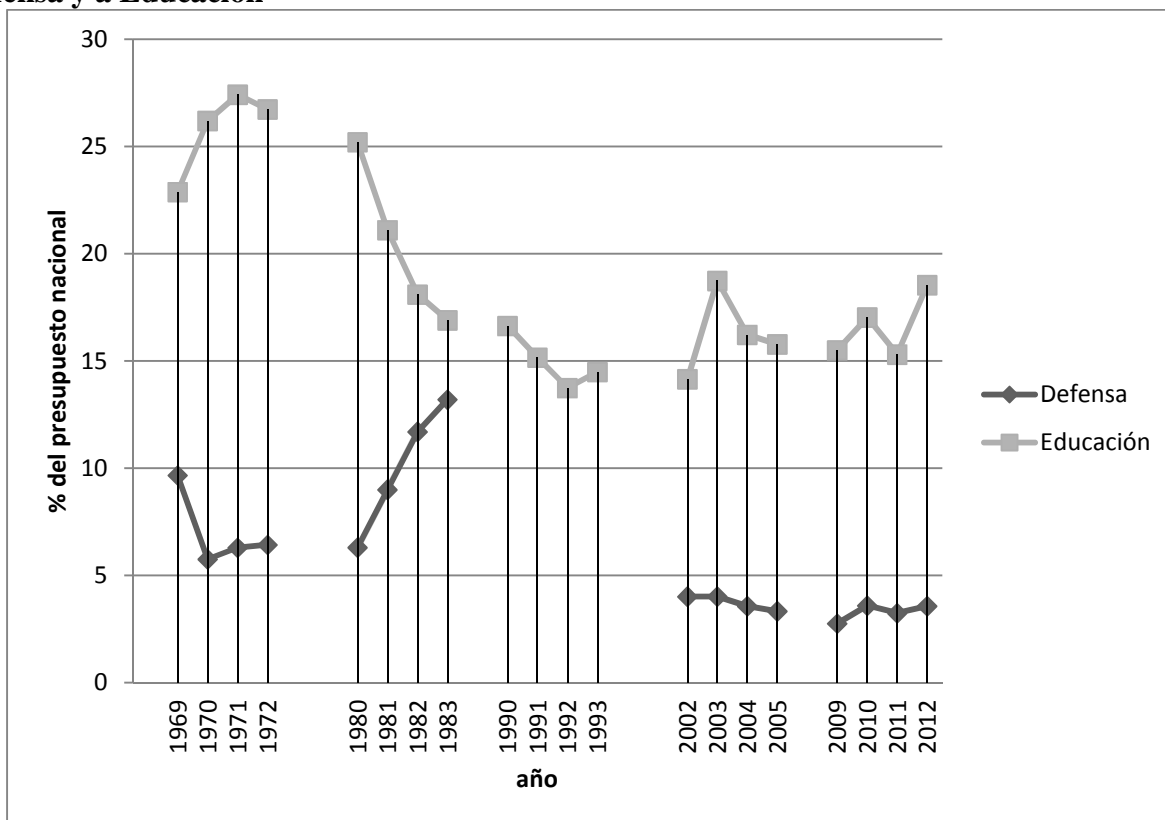
El gráfico 1 muestra el porcentaje del presupuesto nacional que el Gobierno Central destina a dos rubros: educación y defensa en cuatro momentos clave. El primer cuatrienio va de 1969 a 1972, que se caracterizó tanto por una hegemonía de los militares en el poder (con el presidente del oficialista PCN Fidel Sánchez Hernández electo en condiciones controladas) combinada con una presión de los Estados Unidos (por medio de USAID y la Alianza para el Progreso) para que invirtiera en ciertos rubros, uno de ellos el de la educación. Véase como el porcentaje de presupuesto que se dedica a educación es especialmente alto, llegando incluso al 27% en 1971, en contraste con el presupuesto de Defensa que más bien desciende de 9,5 a 6,5% en 1972. El dato es muy significativo si se considera que en esta época surgieron las primeras organizaciones guerrilleras formalmente constituidas (las Fuerzas Populares de Liberación y el Ejército Revolucionario del Pueblo) y la protesta social vivía un momento de radicalización.

El segundo cuatrienio que se grafica es el que va de 1980 a 1983. Cabe destacar que todavía en el primer año de la guerra civil el porcentaje de presupuesto que se dedicaba a educación era del 25% pero, como sería de esperar, este fue descendiendo a medida que el país se internaba en el conflicto bélico. En contraste, el presupuesto de defensa se eleva hasta alcanzar en 1983 el 13%, es importante recordar que esta elevación coincide con los años más duros de la guerra, cuando se ejecutaron crímenes de lesa humanidad tristemente célebres como la masacre del Mozote o la del Rio Sumpul.

Para el tercer cuatrienio solo se tiene el dato del presupuesto educativo y no el que se destina a defensa. Como se puede observar el porcentaje en este periodo desciende progresivamente oscilando entre un 13 o 14%. Se debe recordar que en este periodo se contemplan los dos años anteriores a la Firma de los Acuerdos de Paz y los dos posteriores. Pese a no tener el dato exacto, es de esperar que el final de la guerra redujera de manera importante el peso relativo de defensa nacional, no solo por el hecho concreto del final del conflicto, sino porque parte de los acuerdos que se firmaron en Chapultepec implicaban el desmantelamiento de ciertos sectores y transformación institucional de las Fuerzas Armadas.

Para el cuatrienio 2002-2005 se puede observar un pico de financiamiento en el final de la administración Flores donde el porcentaje asciende al 18%, en contraste con el resto de la época donde se mantiene entre 14 y 16%. En cambio, el presupuesto de defensa se reduce levemente de 4 a 3%. Un comportamiento muy parecido podemos ver durante la administración Funes (2009-2012) -la primera del FMLN- mientras que en los años iniciales el presupuesto oscila entre 15 y el 17%, hacia el final del periodo aumenta levemente hacia un 18%. Por su parte, el presupuesto de defensa se mantiene constante entre un 2 y un 3%.

Gráfico No 1. El Salvador: Porcentaje del presupuesto nacional dedicado a Defensa y a Educación



Fuente: Elaboración propia con datos de Gallardo y López (1986); Walter (2014) y Ministerio de Hacienda (2002; 2003; 2004; 2005; 2009; 2010; 2011; 2012).

Esta mirada al los porcentajes presupuestarios, permite brindar algunas conclusiones pertinentes. Es visible cómo la apuesta educativa que se hizo en las décadas de 1960-1970 y que ha sido resaltada por varios autores (Walter 2014; Almeida, 2011; Torres Rivas, 2011) incidió en la consolidación de una generación de salvadoreños/as apropiados/as de su propio entorno, y de su nacionalidad. En contraste con este proceso, el sistema político en que se movían era renuente a toda posición contraria y privilegiaba la sujeción acrítica al disenso y debate.

Dada la enorme vinculación de estudiantes y jóvenes a los movimientos de protesta y eventualmente a las guerrillas, es dable pensar que el esfuerzo realizado mediante la inversión educativa no logró ser absorbido por el aparato del Estado, si no que se volvió contra él, en forma de movimientos revolucionarios. Esto es lo que se muestra en la guerra civil y se refleja en el presupuesto: el Estado ahora no lidia con los jóvenes educándolos sino disparándoles, literalmente.

También es visible otra tendencia: el descenso en la inversión educativa se hizo visible ya al comienzo de la guerra. Cabría esperar que luego de que se firmaran los Acuerdos de Paz este presupuesto se elevara como consecuencia del proceso de democratización, sin embargo, los datos muestran que nunca más se ha vuelto a los porcentajes de financiamiento que se tuvo durante las décadas de 1960 y 1970. La baja inversión en educación pública se puede explicar, al menos en los periodos 1990-1993 y 2002- 2005 si se recuerda que el partido que gobernó fue ARENA tradicionalmente ha

exhibido un discurso antiestado y durante sus administraciones desincentivó la inversión pública. Sin embargo, llama la atención que esta tendencia se mantenga durante el primer gobierno de la izquierda del FMLN y que no se reporte una apuesta educativa como la que se observó 30 años atrás. Un dato que sin duda quedará para estudios posteriores sobre este periodo de transformaciones en la historia salvadoreña.

Sugerencias

A raíz de la problematización que se ha hecho en este documento, se proponen a continuación una serie de sugerencias que puedan ayudar a solventar las problemáticas hasta acá expuestas:

A los Estados:

- Es fundamental comenzar a pensar las iniciativas de política pública que permitan observar la convergencia de problemáticas regionales derivadas de los conflictos armados. Estas deben estar planteadas en un marco regional, que prevea el acuerdo sostenido entre instituciones públicas. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio con EE.UU. los Estados centroamericanos tienden a pensar la unidad de la región únicamente en términos comerciales, iniciativas como esta dan pie para pensar la perspectiva regional en una forma diferente a la integración comercial, para hacerse cargo de las raíces geopolíticas comunes de nuestros problemas.
- En segundo lugar, se debe atender urgentemente la necesidad de dotar los presupuestos educativos de mayor cantidad de recursos, de manera que las condiciones de estudio de las jóvenes generaciones de centroamericanos y centroamericanas mejoren. Ello no es una condición suficiente pero sí un inicio fundamental de cualquier otra política donde se incentive la discusión abierta y general de los conflictos armados que asolaron nuestra región.
- Se propone además que se cree una *política de la memoria* que funcione de manera sostenida integrando a los Ministerios de Cultura de la región, donde se generen iniciativas de difusión y concientización acerca de las causas, consecuencias y efectos de los conflictos armados. Esta política de la memoria puede tener ramificaciones en diferentes iniciativas como:
 - Redes de museos que incentiven exposiciones itinerantes, becas para explorar el tema, exposiciones temáticas, etc.
 - Una política de cultura de carácter regional que permita la planificación de monumentos y museos que recuerden el conflicto armado como una experiencia centroamericana (no limitada a cada país).
 - Una política de incentivos para activar de manera sistemática el tema a lo interno de las Universidades Públicas. Este punto se desarrollará con más amplitud a continuación

A las Universidades Públicas:

- La desestructuración de la Universidades Públicas que se ha descrito, debe ser respondida desde el punto de vista de política académica. Es urgente que las Universidades Públicas reconstruyan un tejido de investigadores/as sociales abocado al ámbito de la comprensión del conflicto armado y sus consecuencias para nuestras sociedades.
- Las Universidades Públicas deben reactivar los mecanismos de convergencia institucional que funcionaron durante las décadas de 1960 y 1970. Si bien es cierto la oficina del CSUCA sigue existiendo, esta ha perdido su proyección regional y su capacidad de incidencia y articulación de iniciativas universitarias centroamericanas, esta iniciativa debe ser replanteada o sustituida de manera que vuelva a aglutinar los esfuerzos de coordinación regional de investigación.
- Se debe desarrollar una política de inversión de recursos en el área de investigación sobre el conflicto armado, de manera que se puedan sostener iniciativas de largo aliento que combinen la investigación y la docencia sobre este tema.
- Este estímulo se puede dar por medio de la creación de programas de carácter interdisciplinario que incentiven la investigación, lectura y discusión entre estudiantes y docentes. Los programas de investigación deben también ser capaces de proyectar sus reflexiones al ámbito público por medio de publicaciones de carácter científico y de divulgación periodística.
- Otra medida puede ir hacia la creación de programas de posgrado que incentiven el pensamiento de la región centroamericana en términos históricos. Una de las consecuencias más palpables de la crisis sufrida por las Universidades Públicas es la ausencia de programas de posgrado con perspectiva regional que posibilite visiones de conjunto de las problemáticas regionales. Experiencias muy fructíferas en este sentido han sido desarrolladas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), con el Programa Centroamericano de Posgrado que funcionó entre 2002 y 2013, sin embargo, la dependencia de la cooperación internacional de estas iniciativas las hace frágiles, dado que tambalean en el momento en que la agencia(s) cooperante(s) que las sostiene decide cambiar de política. Es por eso que este debe ser un esfuerzo asumido por Universidades Públicas, que mediante presupuestos nacionales financien esfuerzos en este sentido.

A investigadores/as de la región centroamericana:

- Es importante que las personas interesadas en abordar en términos de investigación la temática del conflicto armado apliquen una perspectiva centroamericana a sus trabajos, que incluya la contextualización de los conflictos en una esfera regional mayor que la discusión nacional.
- Asimismo este grupo de investigadores debe abocarse a la creación de una red de contactos que permitan un intercambio fluido de material, preguntas y

agendas de trabajo, de manera que la reflexión se construya de manera conjunta y teniendo como horizonte el trabajo que trasciende a cada uno de los países.

- Es importante que esta red tenga carácter inter y transdisciplinario para que se fortalezca en la diversidad de enfoques teóricos y metodológicos de tal suerte que se brinden la mayor cantidad de respuestas al fenómeno.
- Otra característica de la red deberá ser la constante integración de jóvenes investigadores/as que desarrollen sus Trabajos Finales de Graduación en esta temática, de manera que el conocimiento no solo se dinamice en el sentido disciplinario sino también generacional.
- Por último, es importante que esta red se mantenga activa a partir de la realización periódica de actividades de investigación (congresos, foros, charlas, conferencias) que sean organizados por las Universidades Públicas de la región en un esfuerzo de visibilizar la temática de los conflictos armados.

Bibliografía:

- Almeida Paul (2011) *Olas de movilización popular: movimientos sociales en El Salvador: 1925-2010*. (San Salvador: UCA)
- Arzobispado de Guatemala (Oficina de Derechos Humanos) (1998) *Guatemala Nunca más*. (Guatemala: Informe del Proyecto Interdiocesano, Recuperación de la Memoria Histórica)
- Bourgois, Phillip. (2005) “Más allá de la pornografía de la violencia. Lecciones desde El Salvador.” en: F. Ferrándiz y C. Feixa (eds) *Jóvenes sin tregua. Culturas y políticas de la violencia* (Barcelona: Anthropos).
- Bataillon, Gilles (2008) *Génesis de las guerras intestinas en América Central (1960-1983)* (México: Fondo de Cultura Económica).
- Brett, Ruddy(2007). *Una Guerra sin batallas: Del odio, la violencia en el Ixcán y el Ixil, 1972-1983*. (Ciudad de Guatemala: FyG).
- Burgos, Elizabeth (2007) *Me llamo Rigoberto Menchú y así me nació la conciencia*. (México: Siglo XXI).
- Comisión de la Verdad (1993) *De la locura a la esperanza: La guerra de 12 años en El Salvador* (San José: DEI)
- Comisión de Esclarecimiento Histórico. *Guatemala: causas y orígenes del enfrentamiento armado interno* (Guatemala: Fyg).
- Gallardo, Maria Eugenia y José Roberto López (1986). *Centroamérica: la crisis en cifras* (San José: IICA/FLACSO)
- Kruijt, Dirk (2009) *Guerrilla: guerra y paz en Centroamérica* (Guatemala: FyG).
- Martínez Peláez, Severo (2008) *La patria del criollo* (México: Fondo de Cultura Económica)
- Martín-Baró, Ignacio (2000) “Guerra y salud mental” En: Martín-Baró Ignacio (ed). *Psicología social de la guerra*. (San Salvador: UCA Editores).

-
- (2004) *Sistema, grupo y poder. Psicología Social desde Centroamérica (II)*. (San Salvador: UCA Editores).
-
- (2007) *Acción e Ideología. Psicología Social desde Centroamérica*. San Salvador, El Salvador: UCA Editores.
- Menjívar, Rafael (1982) *Formación y lucha del proletariado industrial salvadoreño* (San José: EDUCA).
- Ministerio de Hacienda (2014) *Informe de gestión financiera del Estado*. Disponible en: www.mh.gob.sv. Consultado el 19 de marzo de 2014. Periodos consultados: 2005- 2002 y 2009-2012.
- Stanford, Victoria (2003). *Violencia y Genocidio en Guatemala* (Ciudad de Guatemala: FyG).
- Prud' Homme, Olivier (2011) "Ciencia histórica y oficio del historiados: tentativa y fracaso de un proyecto en El Salvador de los años 60" en *Identidades* (San Salvador) Año 2, N° 3.
- Tishler, Sergio (2005) *Tiempo, memoria y sujeto* (Ciudad de Guatemala: FyG).
- Torres-Rivas Edelberto (1982) *Interpretación del desarrollo social centroamericano* (San José: EDUCA)
- Torres-Rivas, Edelberto (1993a) "Introducción a la década" en: Torres-Rivas Edelberto (ed). *Historia General de Centroamérica Vol 6 Historia Inmediata* (España: FLACSO).
- Torres-Rivas, Edelberto (1993b) "La sociedad: La dinámica poblacional, efectos sociales de la crisis, aspectos culturales y étnicos." en: Torres-Rivas Edelberto (ed). *Historia General de Centroamérica Vol 6 Historia Inmediata* (España: FLACSO).
- Torres-Rivas, Edelberto (2011) *Revoluciones sin cambios revolucionarios* (Guatemala FyG).
- Wacquant, Loïc (2006) *Las cárceles de la miseria* (Buenos Aires: Manantial).
- .